

# El sinsentido de las bibliotecas presidenciales en EE.UU.

## O el extraño caso del complejo del faraón

CARLOS DÍAZ REDONDO

U no ya empezaba a acostumbrarse a las extrañas costumbres yanquis, a la curiosa megalomanía, a los desvaríos del sistema gubernamental estadounidense. Y, sin embargo, he de reconocer que cada día que pasa me sorprende. Tal y como si de repente nos trasladásemos al antiguo Egipto, pienso en los grandiosos edifi-

cios levantados para alimentar el ego de los faraones y hacer perdurar su recuerdo en el tiempo en forma de monumentalidad y piedra. Pues parece que así es como Estados Unidos rinde homenaje a sus expresidentes.

Hablamos de las llamadas bibliotecas presidenciales, que saltan ahora a la actualidad

después de que el presidente Barack Obama haya anunciado recientemente que levantará una biblioteca en su memoria cuando finalice su mandato. Curiosamente, la creación de este tipo de edificios —llamémoslas bibliotecas si queréis, aunque en realidad se trate más bien de archivos o centros documentales— no está





amparada siquiera por la Constitución norteamericana o por alguno de los demás textos fundacionales del país.

El primero de estos centros comenzó a gestarse en el año 1938. Entonces, el presidente Franklin D. Roosevelt, preocupado por el devenir de la documentación no oficial generada durante su mandato, comenzó a darle vueltas a la idea de levantar una especie de archivo público con el fin de reunir aquellos papeles que quedaban fuera de las competencias de custodia de la administración. No era una preocupación trivial. La gran mayoría de los archivos personales de los presidentes que le precedieron habían desaparecido o pasado a engrosar los fondos de coleccionistas privados.

Los planes de Roosevelt se materializaron en 1941, en su ciudad natal de Hyde Park,

Nueva York. Y con ellos, llegó el Acta de Bibliotecas Presidenciales aprobada en 1955, gracias a la cual la costumbre de que cada presidente fundase su propia biblioteca quedó convertida en ley. Sin embargo, esta ley permitía que cada presidente mantuviese la propiedad legal sobre sus papeles. Tras la renuncia del presidente Richard Nixon por el caso Watergate, y el escándalo que causó el hecho de que se negase a entregar determinados expedientes que ponían de manifiesto las tácticas poco éticas de una parte de su equipo, quedó aprobada el Acta de Documentación Presidencial de 1978. Según esta, el Estado se convertía en propietario legítimo de esta clase de fondos.

Un acta necesaria pero muy poco inteligente en realidad porque, a la par que le otorgaba la propiedad de la docu-

mentación al Estado, daba al Gobierno de turno la total capacidad de decidir qué documentos irían a parar a las bibliotecas presidenciales. Así, por ejemplo, la biblioteca presidencial de Bill Clinton, situada en Little Rock, Arkansas, omite toda información relativa a su affaire con Mónica Lewinsky, de la misma manera que la del expresidente George W. Bush, situada en Dallas, pasa por alto cualquier información acerca de la invasión de Irak y sus políticas sobre el terrorismo internacional.

Pero claro, fuera de todo sentido común, el presidente Barack Obama no podía ser menos. Imbuido por el disparate de dejar para las generaciones venideras su propia pirámide, su propio legado, estaba tardando en desarrollar ese extraño complejo de farazón. Y en medio de una crisis

financiera mundial que sacude los pilares de todos los Estados y que asfixia presupuestariamente a bibliotecas y archivos ya consolidados, en estos momentos decide si su biblioteca presidencial estará emplazada en Chicago, Nueva York o Hawái.

quien aporte los fondos necesarios para que la Universidad pueda adquirir los terrenos y emprender finalmente la construcción del edificio.

Pero, ¿hasta qué punto tienen sentido estas bibliotecas? Además de ser centros muy poco democráticos, pues no es

Entonces, por una cuestión de mera lógica, un servidor se pregunta: ¿es realmente necesaria la fundación de una biblioteca presidencial por cada uno de los presidentes que pasan por el salón oval de la Casa Blanca?; ¿no sería más democrático, más práctico, más eco-



La Universidad de Chicago ha sido la primera en dar un primer paso adelante, sin embargo no es propietaria de los terrenos donde se pensaba proyectar el edificio. Por ello, el alcalde de la ciudad, Rahm Emanuel, a la par antiguo jefe de gabinete de Obama, ha anunciado que se están estudiando diferentes vías de actuación. Así, todo apunta a que será finalmente la ciudad

más que el Estado quien decide en último término cómo se recordará a los expresidentes, definitivamente tampoco son económicas. Sin ir más lejos, el mantenimiento de todos estos centros –trece hasta el momento para ser exactos– tiene un coste de casi cien millones de dólares anuales que se traducen directamente en impuestos para el ciudadano norteamericano de a pie.

nómico crear un centro de estudios presidenciales en el que se custodie toda esa documentación?

Pues no. A los presidentes norteamericanos parece no entusiasmarles esa idea. No les gusta el Valle de los Reyes. Ellos quieren edificios monumentales que hagan perdurar sus nombres y sus hazañas. Ellos son más de pirámides y mastabas. ■